

C.A. de Concepción
Concepción, ocho de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Que, en estos antecedentes, Rol Ingreso corte N° 795-2024, compareció el abogado Pedro Ignacio Peña Sánchez, por la parte demandante, en Procedimiento de Aplicación General, en RIT N° O-500-2024 del Ingreso del Juzgado del Trabajo de Concepción, caratulados “Morgado con Universidad del Biobío” se ha dictado la sentencia definitiva de fecha 5 de octubre de 2024, dictada por el referido Juzgado, mediante la cual se rechaza la demanda del actor en todas sus partes.

En contra de la referida sentencia, se ha alzado la parte demandante recurriendo de nulidad, con el objetivo que se acoja el recurso, se invalide la mencionada sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, que acoja íntegramente la demanda, con costas.

Funda su recurso en las causales del artículo 478 letra b), en conjunto con la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo. En subsidio, invoca la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo; y en subsidio de ésta la del artículo 477 del Código del Trabajo.

Admitido el referido recurso a tramitación, se procedió a su vista, oportunidad en la que asistieron los abogados de ambas partes.

Se trajeron los autos para fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, en cuanto a la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, dice que la apreciación de la prueba contenida en la sentencia vulnera lo establecido por el legislador en el artículo 456 del Código del referido, específicamente los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

En cuanto a los principios de la lógica acusa como vulnerados el principio de no contradicción y el de identidad.

Respecto del primero señala que la manifiesta vulneración se encontraría en los considerandos 6° y 7° de la sentencia del a quo, por cuanto, a su parecer, resultaría contradictorio que pese a haberse dado por acreditado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RMPZXULRNCL

el pago mensual de sumas equivalentes de dinero por los servicios prestados, la inclusión en los contratos de una obligación genérica de cumplir con todas las labores encomendadas por la jefatura y a que los testigos de su parte señalaron que su representado estaba sujeto a las instrucciones de la jefatura correspondiente y que gozaba de feriado legal, el magistrado haya arribado a la conclusión de que la relación contractual que vinculó a la Universidad con su representado se desarrolló en el contexto de un contrato de servicios a honorarios para el desarrollo de cometidos específicos -estimando así que la relación entre las partes fue meramente civil-, no obstante que los medios de prueba permitirían concluir la situación contraria.

En cuanto al principio de identidad, expresa que, la calificación jurídica que realiza el tribunal de las labores ejecutadas por su representado y la relación laboral que la vinculó con su ex empleadora vulnera esta regla de la lógica, pues no habría tomado en consideración los hechos que se acreditaron con los diversos medios probatorios aportados por las partes al momento de enunciar dicha calificación jurídica, y huelga sobre los mismos argumentos ya referidos.

Concluye que, la valoración de la prueba rendida en el proceso atentaría contra la naturaleza jurídica del contrato, pues lo califica como de carácter civil, a pesar de que la relación contractual celebrada entre las partes contiene una serie de índices de una relación de subordinación y dependencia en los términos de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo. De esta forma, la valoración de la prueba por parte del tribunal atentaría contra la regla de la identidad, al ir en contrario sensu de cómo la Jurisprudencia ha indicado lo que implica y se entiende como cometido específico en una relación a honorarios y cita jurisprudencia.

En cuanto a la vulneración de las máximas de la experiencia, señala que sería de común conocimiento que, en la práctica, estas relaciones laborales, dada lo asimétrica que resulta para el trabajador respecto de su empleador, cumplirían con todas las condiciones propias de un contrato de trabajo acorde lo establecido en el artículo 7° del Código del Trabajo. Esto se condeciría, además con una serie de elementos que se habrían tenido por acreditados en la sentencia, tales como la continuidad en la prestación de los



servicios por más de 7 años a favor de la demandada, el pago de una remuneración mensual previa emisión de la respectiva boleta de honorarios y el informe de gestión mensual, la sujeción a las instrucciones de una jefatura, así como derecho a feriado legal, como se desprendería de los considerandos Tercero y siguientes del fallo. Vuelve a expresar que de la prueba rendida en autos y apreciada por el tribunal, se desprenden los indicadores de subordinación y dependencia que se consignan en la regla del artículo 7° ya citado.

En conjunto con la anterior, interpone la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando se necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior. Al respecto señala que la sentencia incurriría en una errada calificación jurídica de los hechos, puesto que pese a haberse acreditado pagos parciales de las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía, de igual manera calificó el auto despido ejercido por su representado como una renuncia. Luego señala que de acogerse el recurso por la causal anterior, necesariamente debiera cambiar la calificación que ha hecho el a quo del auto despido del actor, estableciendo el incumplimiento grave aludido en el respectivo aviso.

En subsidio invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, reiterando los argumentos ya referidos, en cuanto a que el fallo impugnado habría vulnerado los principios de identidad y no contradicción de la lógica formal y las máximas de la experiencia.

Luego, y nuevamente en subsidio, deduce la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en cuanto el fallo recurrido habría incurrido en infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Al respecto, acusa como infraccionados el artículo 1° del Código del Trabajo con relación al artículo 11 de la Ley 18.834, por falsa aplicación de estas disposiciones. Se fundamenta esta infracción en el sentido que el demandante habría prestado servicios a la Universidad del Bio Bio bajo claros índices de subordinación y dependencia, conforme a los hechos acreditados en el considerando sexto, debiendo regirse por tanto sus derechos y obligaciones por las normas establecidas en la legislación laboral, y no por las



normas del Estatuto Administrativo. En consecuencia, la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo en relación con el artículo 11° de la ley 18.834, estaría dada por la vigencia de dicho Código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie la Universidad del Bio Bio, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se han desempeñado en las condiciones previstas por el Código del Trabajo. En específico, en los considerandos sextos y siguientes de la sentencia recurrida se habría acreditado que su representado prestó servicios de manera ininterrumpida por más de 7 años, recibiendo el pago de una remuneración mensual, que debía reportar el cumplimiento de sus labores mediante informes de gestión mensual, que estaba sometido a las instrucciones de la jefatura correspondiente, que tuvo beneficio a feriado legal. De lo anterior, se desprende que el tribunal de instancia no aplicó correctamente la norma citada, a pesar de que su representado ejecutó sus servicios en razón a una función habitual del organismo, de manera no accidental, así como tampoco realizando cometidos específicos.

Luego acusa infraccionados los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo. Se fundamenta la infracción, en primer lugar, indicando que el fallo recurrido infringió el artículo 7° del Código del Trabajo, al no dársele su debida aplicación, dado que, de acuerdo con su tenor, y conforme lo acreditado en juicio, correspondía determinar que las partes de autos se vincularon a través de un contrato de trabajo y no a través de una contratación a honorarios, como se señala en la parte resolutive de la sentencia. En el caso de marras no sólo correspondía considerar los términos de los respectivos documentos conforme a los cuales su representado se incorporó a la dotación de la Universidad del Bío Bío. Tampoco los acuerdos arribados por las partes, sino lo que sucedió en la práctica, en aplicación del criterio protector que la doctrina laboral denomina “la primacía de la realidad”. Tal principio se encuentra consagrado en el inciso primero del artículo 8° del Código del Trabajo, en la medida que toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 7° del mismo, esto es, de



carácter personal, contra el pago de una remuneración, y bajo subordinación y dependencia, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

Al respecto, dice que el tribunal tuvo por acreditados en el considerando sexto, diversos elementos propios de una relación laboral que constituyen, en la especie, índices de subordinación y dependencia, tales como continuidad en la prestación de los servicios por más de 7 años, percibiendo el pago de una remuneración mensual y cumpliendo con la obligación de reportar sus actividades de forma mensual, estuvo sujeto a las instrucciones de la jefatura correspondiente, así como teniendo beneficio a feriado legal, entre otros.

2° Que, el recurso de nulidad tiene por objeto según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de las disposiciones en que se consagran las causales que lo hacen procedente, los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo; lo que evidencia su carácter extraordinario, el que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguida por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquéllas que invoca, como asimismo, de las peticiones que efectúa.

Igualmente, cabe tener presente que el arbitrio anulatorio en examen no constituye una instancia, de manera que las Cortes de Apelaciones no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimientos de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció el respectivo juicio oral, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente al juez de especialidad, el que está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el



cumplimiento de este límite lo que corresponde controlar, cuando se invoca la correspondiente causal de nulidad.

Asimismo, el recurso de nulidad es un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación y argumentación, que debe ser compatible con la causal invocada, lo que resulta necesario toda vez que aquella define la competencia del tribunal superior, el cual no puede acogerlo por motivos distintos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo. Por último, el inciso final del artículo 478 del mismo cuerpo legal impone al recurrente, si el recurso se fundare en distintas causales, la obligación de señalar si se invocan conjunta o subsidiariamente.

3° Que, aclarado lo anterior, corresponde analizar la concurrencia de las causales anulatorias invocadas por el recurrente.

4° Que, en cuanto a la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, ésta, busca controlar el razonamiento probatorio contenido en la sentencia, con miras a verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que las razones vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos, pero para ese fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa del mismo. Igualmente, para que prospere la causal alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es, evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista. Además, la causal exige que en el recurso se indiquen que reglas de la sana crítica fueron infringidas y como se produce esa trasgresión.

En el caso *sub lite*, el recurso de nulidad presentado no cumple con los extremos recién señalados, pues el impugnante no logra articular cuáles son las transgresiones cometidas para cambiar los hechos fijados por el tribunal.



En efecto, del lato desarrollo de su libelo, lo que se aprecia más bien es la disconformidad que éste tiene con los razonamientos del tribunal y cómo éste apreció la prueba producida en juicio.

Dice que el fallo habría incurrido en la transgresión de los principios de no contradicción y de identidad de la lógica formal, lo que se habría constatado, principalmente, en los considerandos sexto y séptimo del fallo.

Sin embargo de la lectura de los considerandos en comendo, no se aprecia que exista la contradicción alegada ni la falta de identidad que acusa el recurrente. En efecto, en el considerando sexto el sentenciador afirma que de los antecedentes probatorios se desprende que el actor prestó servicios en el marco de un Programa determinado, con financiamiento del Ministerio de Educación, destinado a un grupo de estudiantes de sectores vulnerables, el trabajo era de carácter territorial en las modalidades indicadas y en tal calidad debía participar en reuniones habituales de seguimiento, debiendo informar sobre las actividades realizadas para recibir el pago de sus honorarios. Descartando dar por probados las demás afirmaciones de la demanda en orden a la subordinación y dependencia. En el considerando séptimo descarta que las actividades realizadas excedieran la especificadas en el contrato y que éstas correspondieran a actividades habituales de la Universidad.

Dado lo anterior, lo que hace el sentenciador en los referidos considerandos es concluir que el material fáctico allegado al juicio permite concluir tales asertos que no coinciden con las apreciaciones que tiene el recurrente de los mismos, pero en modo alguno se constata la contradicción alegada ni la falta de identidad que acusa el libelo anulatorio.

En cuanto a las máximas de la experiencia, el recurrente no precisa en su libelo cuáles son las máximas de la experiencia que el sentenciador no tuvo en vista para resolver la controversia, sino que se limita a señalar que éste al fallar como lo hizo vulneró las máximas de la experiencia, para luego analizar el material fáctico incorporado al juicio en la forma como él estima que debió ser apreciado por el juez, arrogándose una facultad que es privativa del juez de fondo, para luego señalar que el juez habría vulnerado esta máximas al no



seguir la línea jurisprudencial asentada en los fallos que cita, por lo no cabe más que desestimar también esta alegación del recurrente.

En consecuencia, dado lo razonado es que no puede prosperar el recurso en lo referente a esta causal.

5° Que, en conjunto con la causal anterior invoca la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, a saber: “cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”. En atención a que esta causal se interpuso en forma conjunta y habiendo sido ésta desestimada, no cabe más que rechazarla por mera formalidad, siguiendo la suerte de la principal.

En efecto, *“...la formulación conjunta comprende la hipótesis en que las causales interactúan de modo que la una precisa de la otra, de lo que se sigue que el éxito del recurso está condicionado a la configuración de todas ellas...”* (ASTUDILLO C., Omar: “El Recurso de Nulidad Laboral. Algunas Consideraciones Técnicas”; Thomson Reuters; 1° edición; Santiago, 2012; pág. 209).

En consecuencia, no cabe más que desestimar la concurrencia conjunta de estas causales respecto de la sentencia del a quo, sin perjuicio de lo que se dirá en los considerandos 7° y siguientes del presente fallo.

6° En subsidio, invoca nuevamente la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, con los mismos fundamentos, de tal forma que deberá remitirse a lo ya indicado en el considerando 4° precedente.

7° Que, siempre en subsidio, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Acusa infraccionados los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo con relación al artículo 11 de la ley 18.834, en los términos ya expuestos en la parte expositiva del presente fallo, los que se dan por reproducidos en este considerando.

8° Que, cabe señalar esta causal tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos



por probados. Dicha hipótesis resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllas en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado-, siempre que cualquiera de estas hipótesis que se presente influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

9° Que, las normas presuntamente infraccionadas disponen: artículo 1° del Código del Trabajo: *“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código”.*

Por su parte el artículo 7° del mismo cuerpo legal señala: *“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.*

Y el artículo 8° señala: *“Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos*



directamente al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo. Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno. Las normas de este Código sólo se aplicarán a los trabajadores independientes en los casos en que expresamente se refieran a ellos”.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos dispone: “*Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.*”

10° Que, invocar esta causal supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito. En este orden de ideas, el recurso se centra en cuestionar la decisión del a quo en el sentido en que no obstante haber dado por establecida la concurrencia de ciertas característica en la relación contractual existente entre el actor y la Universidad que coinciden con lo preceptuado en el artículo 7° y 8° del Código del Trabajo, desoye lo reglado en el artículo 1° inciso tercero del mismo cuerpo, aplicando erróneamente lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 18.834, lo que habría influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que de haberlos aplicado correctamente, habría concluido con una decisión condenatoria acogiendo la demanda del actor.



11° Que, hay que precisar que en el fallo recurrido se dieron por establecidos los siguientes hechos: (considerando 6°) **a).**- Las labores del demandante siempre estuvieron vinculadas al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), adjudicado por el Ministerio de Educación. Dicho programa otorga financiamiento para llevar a cabo acciones destinadas a preparar a estudiantes de sectores vulnerables de tercero y cuarto año de educación media, de los establecimientos designados para participar en el programa. Estas acciones incluyen el acceso y acompañamiento de los estudiantes habilitados que se matriculan en alguna de las instituciones de educación superior en convenio, con el objetivo de lograr su titulación; **b).**- El trabajo del demandante era de carácter territorial, en los establecimientos educativos designados, debía diseñar e implementar talleres para los alumnos; **c).**- En el cumplimiento de esa función, consta que participaba en reuniones regulares del equipo del programa, que contaba con un supervisor, Leslie Abarzúa, y un coordinador general, Javier Toledo; **d).**- La existencia de dichas reuniones y la coordinación permiten inferir que se realiza un seguimiento al diseño del plan y al avance de las actividades realizadas por el demandante; **e).**- Consta que el demandante informaba mensualmente sobre las actividades realizadas antes de recibir el pago de sus honorarios; **f).**- El pago de sus honorarios se efectuaba en parcialidades mensuales iguales; **g).**- Dentro del contrato a honorarios, se incluía el derecho al receso universitario; **h).**- No requería instrucción o supervisión permanente de una jefatura; **i).**- Sus tareas no dependían del cumplimiento de una jornada diaria determinada; **j).**- Su trabajo se desarrollaba en función del cumplimiento de los objetivos del programa; **k).**- El demandante nunca contó con una oficina o espacio dentro de la Universidad, y solo asistía a reuniones o a recoger material cuando estaba disponible. Las reuniones eran habituales, pero no fijas ni permanentes; (considerando 8°) **l).**- Desde junio de 2019 y hasta el término del contrato, el demandante declaró y pagó sus cotizaciones de salud y previsión en Fonasa y AFP como trabajador independiente, en razón de la ley 21.133 que mantiene y regula la obligación de cotizar de los trabajadores independientes.



12° Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si los demandantes desplegaron un quehacer como lo ordena el citado artículo 11 de la Ley 18.834 o si, por el contrario, lo desarrollaron bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador, conforme a los hechos asentados en la sentencia en examen.

13° Que, conforme a la normativa antes mencionada, la premisa estaría constituida por la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiéndose por tales, en general, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del ordenamiento aludido, esto es, la relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha tarea, donde la presencia de aquéllas constituye el elemento esencial, determinante y distintivo de una relación de este tipo.

Por su parte, el contrato a honorarios es un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. Los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad. En este sentido, entre varias, sentencias de la Excma. Corte Suprema, cabe citar la de fecha 03 de enero de 2020, rol 15.615- 2019 y la de fecha 12 de junio de 2020, rol 23.063-2019.



Así las cosas, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan la presencia de subordinación o dependencia clásica, esto es, a través de la verificación de indicios materiales.

14° Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, ha quedado establecido que el actor desempeñó para la Universidad del Bío-Bío mediante múltiples contratos a honorarios para realizar diversas funciones, propias del quehacer natural y habitual de la Universidad, no evidenciando accidentalidad ni especificidad de las mismas, como queda patente con los asertos del fallo en el considerando tercero, cuando expresa que “las partes están de acuerdo en que el demandante trabajó con contratos de prestación de servicios a honorarios. Se acompañaron 16 convenios de prestación de servicios suscritos entre las partes fechados: 17/05/2016, 19/07/2016, 16/01/2017, 08/08/2017, 22/01/2018, 30/07/2018, 14/01/2019, 05/08/2019, 14/01/2020, 25/01/2021, 20/09/2021, 19/01/2022, 01/07/2022, 07/10/2022, 18/01/2023, 16/01/2024. El primer contrato se inicia el 4 de abril de 2016 y los siguientes abarcan periodos sucesivos de enero a diciembre de cada año, hasta el año 2023”.

De igual forma en el mismo considerando se señalan las funciones que debía cumplir el actor, en los siguientes términos: “En cada contrato se establece una lista de labores, entre las que se señala: velar por el cumplimiento de los hitos y requerimientos del Programa PACE establecidos en el programa de trabajo y emergente durante la implementación, dentro del marco de la UBB; coordinar y agendar trabajo territorial en los establecimientos educativos designados, mediante calendarización mensual; diseñar, planificar, elaborar e implementar talleres para estudiantes de tercero y cuarto medio de los Establecimientos PACE; reportar a su coordinación mediante la utilización de los canales formales de



comunicación, los documentos solicitados, avances, resultados o anomalías de manera permanente, autónoma y además, de acuerdo a calendarización o requerimientos puntuales; elaborar informes mensuales, semestrales y anuales que den cuenta del trabajo realizado; **otras funciones encomendadas por su jefatura directa**".

15° Que, acorde estos antecedentes asentados en el fallo y los que se consignan en los considerados 6° y 8° de la sentencia impugnada, se puede apreciar con meridiana claridad que la labor desarrollada por el actor se desplegó, si bien en el marco de un Programa específico, éste se condice con las labores habituales de cualquier Universidad, en lo que dice relación con su tarea de extensión y vinculación con el medio, más aún cuando estas labores se desarrollaron por el espacio de siete años, siempre en las mismas condiciones, debiendo el actor participar de reuniones regulares en dependencias de la Universidad con funcionarios de la misma que actuaban como supervisores y coordinadores, es decir, supervigilando el trabajo del actor, y por el cual recibía un estipendio mensual incluyendo el tiempo de receso universitario, al cual también tenía derecho, debiendo informar además mensualmente respecto de las tareas desarrolladas en orden a cumplir con los objetivos del Programa. Existiendo, además entre las labores a desempeñar según los contratos a honorarios la cláusula de apertura que autorizaba a la Universidad a exigir al actor "otras funciones encomendadas por su jefatura directa". Todo lo cual se encuentra asentado en el fallo en revisión en los términos ya indicados en los considerandos precedentes.

Dado lo anterior, las labores desarrolladas por el actor, carecen de la accidentalidad y especificidad de las labores como lo exige el artículo 11 de la Ley 18.834, como también con la limitación allí establecida que no sean de aquellas que habitualmente debe ejercer el ente público en cuestión, tal como se descartó precedentemente.

No obsta la conclusión anterior, el hecho que el actor no estaba sujeto al cumplimiento de una jornada de trabajo determinada, pues de igual forma en el ejercicio de las funciones debían dedicar un tiempo de su vida diaria para ejecutar estos servicios, ya que ellos decían relación, entre otros, con talleres de docencia impartidos a alumnos del programa, que evidentemente



debía desarrollarse en un horario lectivo. Por lo demás, el indicador de cumplimiento de jornada de trabajo no es en el desarrollo actual de la vida laboral un elemento sustancial para establecer la subordinación y dependencia, puesto que es el propio Código del Trabajo el que exime de la limitación de la jornada de trabajo a ciertos tipo de trabajadores en los artículos 22 y siguientes; de igual forma se ha regulado el trabajo a distancia en una ley especial. Lo que morigera sin lugar a dudas esta exigencia de sometimiento constante a la vigilancia del empleador, y no obstante ello, de igual forma se está sujeto al poder de mando y dirección del empleador, como ocurría en el caso sub lite, ya que debía participar en “reuniones regulares”, tal como lo califica el a quo, que eran de supervisión y coordinación, debiendo, además cumplir con los objetivos fijados en el Programa, los que venían dados por la autoridad competente y no por las motivaciones e ideas propias del actor.

En consecuencia, los indicadores ya enunciados y la forma como se desarrolló la prestación de servicios, surgen de la definición que de contrato de trabajo consigna el artículo 7 del Código del ramo, ya que se trata de servicios personales, intelectuales o materiales que se prestan bajo un régimen de dependencia o subordinación, por los que se paga una remuneración.

Por ende, dado que se han acreditado los requisitos de la relación laboral, como, asimismo, que las funciones desempeñadas por el actor resultan ser propias, habituales y permanentes de la demandada, yerra el sentenciador cuando aplica el artículo 11 de la Ley 18.834 a los hechos por el mismo establecidos, existiendo sin duda un error de derecho al aplicar una norma que no se deduce de los hechos asentados en el proceso, dejando de aplicar lo prescrito en el artículo 7° del Código del Trabajo y sus consiguientes consecuencias jurídicas (razonamiento similar se puede apreciar en la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 12 de junio de 2020, rol 23.063-2019), no cabe más que acoger el recurso de nulidad por esta causal, en los términos que se indicará en la parte resolutive del fallo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo prevenido en los artículos 477, 478, 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE ACOGE**,



sin costas, el recurso de nulidad deducido por el apoderado de la parte demandante y, en consecuencia, se anula la sentencia definitiva de cinco de octubre del año 2024, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, la que es nula, debiendo dictarse, acto seguido y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo respectiva.

Regístrese en la forma que corresponda, insértese en el sistema informático pertinente y devuélvanse los antecedentes virtuales al juzgado de origen.

Redacción del Abogado integrante señor Juan Andrés Álvarez Álvarez.

Rol N° Laboral-795-2025.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RMPZXULRNCL

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Presidente Camilo Alejandro Alvarez O., Ministro Mauricio Danilo Silva P. y Abogado Integrante Juan Andres Alvarez A. Concepcion, ocho de mayo de dos mil veinticinco.

En Concepcion, a ocho de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RMPZXULRNCL